



"2026, Año de Margarita Maza Parada"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OFICIOS

34406/2026

JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES.

34407/2026

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (AUTORIDAD RESPONSABLE)

34408/2026

AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

Por medio del presente me permito comunicarle y en vía de notificación en forma, que en los autos del juicio de amparo **1052/2026**, promovido por

TEXTO ELIMINADO

de su apoderado Manuel Antonio Gómez Olivo, con esta fecha se dictó **SENTENCIA CONSTITUCIONAL**, de la cual se le remite, adjunta a éste, testimonio con sus respectivas evidencias criptográficas.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

[Firmado electrónicamente]

Miguel Ángel Grageda Foyo
Secretario del Juzgado Tercero de Distrito
en el Estado de San Luis Potosí



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TEXTO ELIMINADO





San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis

VISTO, para resolver el juicio de amparo **1052/2026**, promovido por **TEXTO ELIMINADO** a través de su apoderado Manuel Antonio Gómez Olivo, por derecho propio; contra actos del **Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí, San Luis Potosí**; por considerarlos violatorios en su perjuicio de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

RESULTANDO

PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo

Mediante escrito presentado el **quince de junio de dos mil veintiséis** en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí,

TEXTO ELIMINADO a través de su apoderado Manuel Antonio Gómez Olivo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y respecto de los actos siguientes:

"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: El presidente del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, cuyo domicilio es en calle Francisco I. Madero #355, tercer piso, colonia Centro de esta ciudad capital".

"IV.- ACTO RECLAMADO: Del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. La omisión de dictar las medidas eficaces para lograr la ejecución y la materialización y cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral **289/2020/m2**, violentando directamente lo establecido en el artículo 17 constitucional".

SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo



Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiséis se admitió la demanda y se registró con el número de expediente **1052/2026**; se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y, finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y,

CONSIDERANDO

ÚNICO. Incompetencia

El suscrito Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 46, 210 y 211, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración que **el acto reclamado en la presente vía constitucional lo constituye la omisión de hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 289/2020/M2 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el que resultó condenado el Ayuntamiento de Tamazunchale.**

En el entendido que la presente determinación se emite en exacta armonía con lo resuelto por el **Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Noveno Circuito** al resolver el **conflicto competencial 1/2025**, en el que se reclamó al propio tribunal aquí responsable, la omisión de hacer



cumplir un laudo que condenó al Ayuntamiento de Matlapa, San Luis Potosí.

El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política, que establece que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto es de los Jueces de Distrito, establece:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...]

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."

Dicho precepto prevé la competencia territorial de los jueces de Distrito, por lo que establece al efecto que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse.

Ello tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral productiva.

Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dice:

"Artículo 37. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue



*ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante el o la que se presente la demanda.
Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda".*

Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber:

a) Es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

Así, se tiene que es el lugar de ejecución del acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador.

b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, es decir, aquel que previno en el conocimiento del juicio de amparo; y,

c) Cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda

Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea

hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia.

Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado, esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde.

Dentro de los actos negativos, se revela una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado.

En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan.

En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) simples; ii) con efectos positivos; y, iii) prohibitivos.

Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada.

Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables.



Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados.

Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos.

Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta.

Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado.

Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso.

Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado.

Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la correspondiente, para que se produzca la omisión.



Submitted: April 1, 2004; Accepted: July 1, 2004
This study was funded by a grant from the National Science Foundation (NSF) Grant Number: 0000000. The authors thank the reviewers for their comments.

Submitted: April 1, 2004; Accepted: July 1, 2004
This study was funded by a grant from the National Science Foundation (NSF) Grant Number: 0000000. The authors thank the reviewers for their comments.

Submitted: April 1, 2004; Accepted: July 1, 2004
This study was funded by a grant from the National Science Foundation (NSF) Grant Number: 0000000. The authors thank the reviewers for their comments.

Submitted: April 1, 2004; Accepted: July 1, 2004
This study was funded by a grant from the National Science Foundation (NSF) Grant Number: 0000000. The authors thank the reviewers for their comments.

Submitted: April 1, 2004; Accepted: July 1, 2004
This study was funded by a grant from the National Science Foundation (NSF) Grant Number: 0000000. The authors thank the reviewers for their comments.

Submitted: April 1, 2004; Accepted: July 1, 2004
This study was funded by a grant from the National Science Foundation (NSF) Grant Number: 0000000. The authors thank the reviewers for their comments.



distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo –por no cumplirse con una obligación determinada–, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada.

Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo".

Consecuentemente, para los efectos del juicio de amparo, **la omisión de hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral de origen, constituye un acto omisivo con efectos positivos**, pues esa pasividad en que incurre la potestad laboral produce un cambio en la realidad o modifica un estado existente en las cosas, al impedirse indefinidamente la consecución de lo ya condenado.



MOORE, ANNE, CONSULTANT
Theodore B. Ward's Symposium on the
March 29-31, 1990

TEXTO ELIMINADO

TEXTO ELIMINADO

Doliéndose la quejosa, precisamente, que al día de presentar su demanda de amparo, dicho laudo no había sido cumplido a cabalidad.

En ese sentido aunque la autoridad que debe solventar los actos omisivos radique en la ciudad de San Luis Potosí, estos deben de ser ejecutados materialmente en la jurisdicción de Ciudad Valles, San Luis Potosí, esto es, en el **Municipio de Tamazunchale** —de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito—, pues se reclamó la omisión



de hacer cumplir el laudo dictado contra el ayuntamiento de dicha municipalidad, **lo que inminentemente conlleva el requerir de forma personal al ente demandado**, que reside en aquel lugar, bajo los apercibimientos respectivos para el caso de contumacia.

Sin que sea óbice a lo anterior que la reinstalación ya haya tenido verificativo, pues, como se desprende de los efectos del laudo, no solo se condenó al ayuntamiento demandado a la reinstalación, sino también al pago de haberes, mismo que, a la data de la presentación de la demanda de amparo, aún estaba pendiente, de modo que los requerimientos a la demandada a fin de liquidar la condena, conllevan, como se dijo, a requerirla, precisamente, en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí.

En consecuencia, se estima que el Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, es quien debe de ocuparse de la resolución del presente asunto, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial donde tiene ejecución el acto reclamado.

En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo y por ende, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo así como un tomo de pruebas, al **Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles**, en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.



Para tal efecto, remítase oficio vía estafeta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, a fin de que ésta proceda al turno del juicio de cuenta al juzgado que corresponda y remita por la misma vía la boleta correspondiente

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DECLARA SU INCOMPETENCIA para resolver el presente asunto.

SEGUNDO. Remítanse los presentes autos y su tomo de prueba, al Juzgado de Distrito en turno, en San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, a través de la Oficina de Correspondencia Común en dicha municipalidad.

Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió y firma **José de Jesús Rosales Silva**, Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, hoy **veintiocho de agosto de dos mil veintiséis**, quien actúa con el secretario que autoriza y da fe **Miguel Ángel Grageda Foyo**, dándose por terminada la audiencia constitucional Doy fe.

En esta fecha se giran los oficios **34406, 34407 y 34408** a las autoridades correspondientes, a fin de notificarles la sentencia que antecede. Coste.

El suscrito Secretario hace constar en esta fecha, que debido a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional, la hora de las evidencias criptográficas que contiene la presente determinación no coincide con la aprobación y emisión de la misma, lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General AG-POAJ-006/2026 del Pleno del Órgano de Administración Judicial, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Órgano y conforme al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 21/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **"FIRMA ELECTRÓNICA. SU SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL JUEZ Y DEL SECRETARIO EN DÍA INHÁBIL Y EN FECHA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA Y, EN SU CASO, DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SON VICIOS DE TRASCENDENCIA**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPERIOR QUE AMERITEN REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO". Lo que se certifica y hace constar para los efectos conducentes. Doy Fe.

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, **VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS, MIGUEL ÁNGEL GRAGEDA FOYO** SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO:**

1. PARA EFECTOS DE LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA PRESENTE SENTENCIA **SE HA SUPRIMIDO LA INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL**, DERIVADA DE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A LAS PERSONAS IDENTIFICADAS O IDENTIFICABLES, TALES COMO DATOS GENERALES, SUS BIENES O POSESIONES, DENOMINACIONES DE NEGOCIACIONES O PERSONAS MORALES, Y AQUELLOS RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA IDENTIFICAR A ALGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL.

2. EN ESTA **VERSIÓN PÚBLICA** NO EXISTE INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL O RESERVADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

LO QUE SE CERTIFICA Y HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES. **DOY FE.**

**MIGUEL ÁNGEL GRAGEDA FOYO
SECRETARIO DEL JUZGADO**

MIGUEL ÁNGEL GRAGEDA FOYO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
165283307_0229000041970815006.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	MIGUEL ANGEL GRAGEDA FOYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.70.b3	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	28/08/26 20:10:34 - 28/08/26 14:10:34	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	a7 a9 a7 0b b9 ea 7b d3 20 9e ec 02 b1 df 21 3c c5 e8 d2 31 30 49 21 a1 18 9d 64 07 9b 86 7a a2 f8 51 3c ee 6e 12 3c de 3f 76 21 8d 21 fe 0b 3e 33 c7 05 d2 a0 3b 17 12 d0 15 21 72 78 84 95 f1 0b af 8b fa 37 31 be 98 68 4e ae 96 9f b0 aa 6a 1e 4d 4a 7c 8b e8 28 4d de f8 70 ca d6 b3 c7 4c 88 c3 c2 13 4b 03 3d fe cf d9 ae b1 44 8d 8a c5 3e 3b 3b 13 70 ea 93 2c 99 0f e1 53 de ea 76 13 4e 8a 8e 80 1d 74 46 6b 1e 62 54 9d 4f b8 8e 48 0a 0f e3 b1 89 94 2b d6 8e 9f 21 ce 45 3a ca 65 46 42 2e be 58 77 a4 df 2b a5 54 76 1c f8 12 89 b9 3e b8 e3 2e 10 9e 6c 23 cf 62 39 3c 43 78 31 a3 63 af e1 9a fc 4f 7e cb 77 8a 71 c1 0a b1 07 bf 1e 46 59 03 53 3a 10 e5 dc 63 16 ae e4 e4 e1 8c 33 b8 73 43 af 62 a8 19 ed 54 10 e2 29 08 12 30 44 2a 88 1b 5e 40 ee df c7 06 46 de 47 f4 d9 53 5f d7 e2 26 ba bc 59 dc ae ed 77 8c 73 cf 9a 45 0a 57 d6 87 24 73 3b 83 85 f3 98 29 f7 93 53 74 0f 4b b0 d0 92 33 4b 25 f2 7c bb 18 84 d2 4a 31 95 29 c2 b9 98 3d 23 6a 22 50 e8 ff cc a2 58 93 b8 23 42 2c 5d 94 e7 5d 23 09 91 89 52 18 ba 32 df d7 06 49 22 a4 ab c8 20 94 80 fa ff b3 e3 9f 3d 34 0a ad aa d2 0c f2 64 fb 6d e2 7c b7 bd fc 1b 7f ac 10 41 e5 08 c2 0b ae 5c ba d8 8c 85			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	28/08/26 20:10:34 - 28/08/26 14:10:34			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.70.b3			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	28/08/26 20:10:35 - 28/08/26 14:10:35			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	198418107			
Datos estampillados:	4g0DJ13fmrgehw54gVd6v4N7qc=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JOSÉ DE JESÚS ROSALES SILVA		Validez:	BIEN
Vigente				
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.30		Revocación:	Bien
Fecha (UTC/ CDMX)	29/08/26 02:06:18 - 28/08/26 20:06:18		Status:	Bien
Valida				
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2c d9 99 23 3e 0e 4d 20 01 33 27 14 27 63 0f 5d fa 03 d1 be 7c a6 5a 6f 74 24 0d 9a 3d 12 96 7e c4 ca 78 19 49 98 82 08 8a 58 1a db 21 50 a7 cf c5 8e bc 06 10 cc 6f 04 ab 6a f1 2a d1 fd dd 2b 1b d1 28 49 be f4 f3 5d 7f bc e1 30 14 8a d7 72 2e ee 33 47 c5 01 8d 57 ac 07 5c 50 42 28 92 72 ed de 6c 4d 6a cb c8 fe 7c 7b 32 85 d8 21 c7 b4 26 1a 1d 6d 2b e4 9c 55 17 24 74 d8 8f c9 d1 16 63 03 71 1e 3c dd 42 ee bb 8f 08 4c 7e 7c 10 07 c5 8d 65 01 a9 d8 a4 2b 58 d1 de 19 df a0 3d 36 1e 0d f2 e4 08 a7 50 42 70 84 ac cd 81 e3 1e b1 bc 77 14 78 77 8c ab ee 60 d2 20 85 04 22 93 19 db cc c4 27 41 8f b3 88 c0 71 1a b3 00 73 59 59 4e 14 84 37 82 0c 09 03 67 d7 7e 0e 77 5b aa f3 01 94 08 9b 88 60 fd 1e 31 05 e8 b0 39 ab 24 78 10 d2 61 4d d9 99 6c fe b3 e6 b5 5e 24 52 3d 87 3d 97 ce 46 91 e0 44 dd e2 73 38 41 71 e3 f2 ef cc bc da 42 ff cf 5b 71 9b ba e9 70 9c ff 91 94 49 01 34 c5 d3 4e 9c 13 11 26 09 8a 8b 4a 02 3b 19 be 8f 18 e3 6d 57 aa 1f 86 9e 02 dc c7 c6 ae 5b 6f d8 89 df d8 6c 34 5b 7f 95 e3 25 ec fa c6 c5 47 50 a9 2e 9c d6 2c ec e6 3e 18 98 bb cd 21 84 07 7f 36 70 95 c5 03 ce a8 f7 4b 6e b0 59 f7 9f d8 d3 b3 74 69 0a a8 3e 7c 16 d7 92 17 9d cb			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	29/08/26 02:06:18 - 28/08/26 20:06:18			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.30			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	29/08/26 02:06:18 - 28/08/26 20:06:18			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	198676049			
Datos estampillados:	5TfPYlpZPArOW0fsZF8BEmG8TM=			

TEXTO ELIMINADO, QUE CONTIENE DATOS PERSONALES COMO NOMBRE, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 3 FRACCION X,XI,XVII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, ASI COMO DISPOSICIONES 38,39,41,42,46,47,48,49 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACION Y DESCALIFICACION DE LA INFORMACION PUBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.